



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE
BOGOTÁ D.C.

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2019-00607-000
PROCESO: EJECUTIVO
EJECUTANTE: ANA ISABEL CAMARGO ÁNGEL
EJECUTADA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES – UGPP
ORDINARIO: 1100133331026-2012-00191-00

A través de escrito obrante a folios 108 a 112 del expediente digital, el apoderado de la parte actora eleva recurso de reposición en contra del auto de calenda 7 de julio de 2020, a través del cual este despacho judicial dispuso inadmitir la demanda.

Debe aclarar el Despacho, que dentro del presente asunto como aún no se ha integrado en contradictorio, no existen otros sujetos procesales a quienes deba correrse traslado del recurso elevado.

Conforme con lo anterior, este Despacho procede a desatar el recurso interpuesto como sigue:

En primer lugar, se tiene que el art. 242 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativos, reza:

“ART. 242.- Reposición. Salvo norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica.

En cuanto a su oportunidad y trámite se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.”

En primer lugar, y conforme a lo definido en el inciso segundo del artículo 242 del C.P.A.C.A., es preciso manifestar que en tratándose del recurso de

reposición, su trámite se rige por los arts. 318 y 319 del C.G.P., en donde se plasma lo siguiente:

“ARTÍCULO 318. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDADES. *Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen.*

El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja.

El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.

El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.

Los autos que dicten las salas de decisión no tienen reposición; podrá pedirse su aclaración o complementación, dentro del término de su ejecutoria.

PARÁGRAFO. *Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente.*

ARTÍCULO 319. TRÁMITE. *El recurso de reposición se decidirá en la audiencia, previo traslado en ella a la parte contraria.*

Cuando sea procedente formularlo por escrito, se resolverá previo traslado a la parte contraria por tres (3) días como lo prevé el artículo [110](#).”

En este orden de ideas, al haberse presentado el recurso de reposición dentro del término legal y en debida forma, el Despacho encuentra que el recurso impetrado es procedente y, por consiguiente, es viable resolver el mismo.

Pues bien, el motivo de inconformidad del apoderado con el auto recurrido es que no está elevando un nuevo proceso en contra de la entidad accionada, sino que se trata de la legalidad que le otorga la Ley procesal a la persona beneficiada por una sentencia judicial, debidamente ejecutoriada, para que el Juez que la dictó la haga cumplir de manera inmediata.

Indica que, como quiera que se trata de una solicitud de ejecución mediante un trámite breve y sumario, no le son aplicables las exigencias de los artículos 162 del CPACA y 82-84 del CGP, por cuanto según explica el Profesional del Derecho, ya fueron agotados en el Proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Por otro lado, señala que la inconformidad de la ejecutante con los valores deducidos por la entidad demandada radica en que ésta dejó de incluir factores salariales devengados por la pensionada en el último año de prestación de servicio y que le fueron pagados unos meses después de su retiro, pero que se causaron en ese año laborado.

De igual manera, afirma que la liquidación que se adjunto con la solicitud de cumplimiento y no de demanda, se encuentra correctamente ajustada al fallo de primera instancia en el cual se ordenó que el valor de las mesadas pensionales adeudadas a la actora se indexase de la manera indicada en la formula allí descrita, en razón al IPC tal y como lo dispone el artículo 187 del CPACA.

Manifiesta el Profesional del Derecho que, no existe ninguna incongruencia entra la liquidación y la desafortunada afirmación que se hizo entre paréntesis en la pagina 2 de las pretensiones, en la cual erróneamente se dijo que el total de las diferencias de las mesadas indexadas antes de la ejecutoria del fallo – 21 de septiembre de 2018, es de \$30.829.936, cuando lo cierto es que, la indicada suma de dinero llega hasta el 30 de noviembre de 2019, fecha en la cual se hizo el corte de los valores adeudados por el mayor valor de la mesada pensional.

Respecto de la liquidación de los valores a solicitar dentro de la presente solicitud, expone que, no es la parte ejecutante a quien le corresponde explicar de donde salen o cual es la fórmula matemática que el deudor efectuó en los comprobantes de pago con los que pretende demostrar la cancelación de lo verdaderamente ordenado en el titulo ejecutivo.

Por consiguiente, indica la parte ejecutante, que es totalmente absurdo, desmesurado e inaceptable, que el valor de los aportes a la pensión dejados de efectuar por la empleada sea de \$86.643.824 y por el patrono \$259.931.473, es decir, en total un monto de \$346.575.297, sea superior en mas de dos veces al monto total del reajuste pensional reconocido a la actora, esto es, \$23.273.604 mas \$129.129.887, para un total de \$152.403.491, los cuales se pueden observar en los comprobantes de pago del Bancolombia de fechas 28 de diciembre de 2018 y 26 de abril de 2019.

Por último, indica, que en cuanto a la exigencia de aportar un nuevo poder que faculte al Profesional del Derecho para actuar en la solicitud de ejecución de sentencia, en razón al procedimiento breve y sumario, al cual se le asignó un nuevo numero de proceso, no le impide realizar las actuaciones posteriores que sean consecuencia de la sentencia y se cumpla en el mismo expediente, y cobrar ejecutivamente las condenas impuestas en la misma. Lo anterior, por cuanto el artículo 306 del CGP, no exige de un nuevo mandato para hacer efectivas las condenas impuestas en el juicio de conocimiento en favor de la actora, habida cuenta que, es la misma tanto en el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho como en la presente solicitud.

Por lo anterior, el apoderado solicita que se reponga la providencia, y que en su lugar se libre mandamiento de pago.

Visto esto, el Despacho procedió a analizar la solicitud elevada por el Profesional del Derecho, encontrándose lo siguiente:

Mediante Resolución No.RDP 043967 del 14 de noviembre de 2018, se reliquida una pensión de vejez en cumplimiento a un fallo judicial.

Que en dicho acto administrativo la UGPP no incluyó en la liquidación los factores salariales denominados prima de navidad, servicios, vacaciones e incentivo por desempeño grupal, por cuanto los mismos no se encuentran certificados en el expediente dentro del último año de servicios.

De la misma manera, en el artículo octavo del mentado acto administrativo, se descontó a la señora Camargo Ángel la suma de \$12.547.923, por concepto de aportes para pensión de factores de salario no efectuados.

Sin embargo, a través de la Resolución No. RDP007484 del 6 de marzo de 2019, la UGPP modifica la Resolución No. RDP 43967 del 14 de noviembre de 2018¹, incluyendo dentro la misma, factores salariales dejados de cancelar por cuanto los mismos no se encontraban en el expediente del último año de servicios, excluyendo de la misma el factor salarial denominado prima de vacaciones, por cuanto la misma fue certificada por fuera del periodo a liquidar.

Corolario de lo anterior, la UGPP realiza un descuento de mesadas atrasadas a las que tiene derecho la señora Camargo Ángel, por un valor de

¹ Folios 34 a 37 expediente digital

\$86.643.824, por concepto de aportes para pensión de factores de salario no efectuados.

Teniendo en cuenta los argumentos esbozados por el apoderado judicial de la parte actora, y las actuaciones desplegadas por la entidad ejecutada para dar cumplimiento al fallo judicial, el despacho procede a realizar el estudio de la alzada elevada por el extremo activo de la litis.

Al respecto, el H. Consejo de Estado en sentencia del 5 de abril de 2018², indicó que, la sección segunda de la misma Corporación a través de sentencias del 18 de febrero de 2016 y 25 de julio de 2017, explicaron los casos en los cuales las obligaciones a ejecutar fueran sumas de dinero, el acreedor podría escoger 2 opciones:

La primera: Instaurar el proceso ejecutivo a continuación del proceso ordinario, con una solicitud debidamente sustentada o mediante un escrito de demanda, para que se libre mandamiento de pago siempre y cuando se de cumplimiento a los requisitos establecidos para tal efecto, es decir, una obligación clara, expresa y exigible.

La segunda: Solicitar al Despacho el requerimiento ante la entidad deudora para que proceda a cumplir inmediatamente con su obligación, sea en el término de 1 año o 6 meses según el caso. Si se realizó en tiempo la solicitud el juez librará el requerimiento judicial.

Señala la máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo, que estas dos opciones son diferentes, puesto que la primera busca que se libre mandamiento de pago y la otra no.

De la misma manera indica que, en el primer caso se deberá especificar la condena impuesta, si hay algún incumplimiento parcial y el monto de la obligación el cual debe ser precisa.

Para el segundo caso, el proceso ejecutivo debe iniciarse dentro del plazo del artículo 192 del CPACA, cumplir con todos los requisitos del artículo 162 de la misma norma y se deberá anexar el título que se persigue.

De lo anterior se puede colegir que, al elegirse la primera opción, es decir, presentar el escrito a continuación del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la solicitud debe cumplir con los requisitos necesarios para que

² Sentencia 537 de 2018 - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO- Rad. No.: 11001-03-15-000-2018-00537-00.

la condena a ejecutar sea clara, precisa y exigible, lo cual no significa que no requiera ninguna formalidad, pues como lo señaló el Consejo de Estado, en esta se debe especificar la condena impuesta, si hay incumplimiento parcial y el monto de la obligación el cual debe ser puntual.

Teniendo en cuenta lo anterior, se vislumbra que, el apoderado judicial solicita que se libre mandamiento de pago por los siguientes conceptos:

- Diferencias de las mesadas ordinarias y adicionales de junio y diciembre del año 2012: \$3.960.179.
- Diferencia de las mesadas ordinarias y adicionales del año 2013: \$3.976.404.
- Diferencia de las mesadas ordinarias y adicionales del año 2014: \$3.937.572.
- Diferencia de las mesadas ordinarias y adicionales del año 2015: \$3.884.893.
- Diferencia de las mesadas ordinarias y adicionales del año 2016: \$3.859.573.
- Diferencia de las mesadas ordinarias y adicionales del año 2017: \$3.913.993.
- Diferencia de las mesadas ordinarias y adicionales del año 2018: \$3.946.464.
- Diferencia de las mesadas ordinarias y adicionales del año 2019: \$3.350.858.
- Total, diferencias mesadas indexadas antes de la ejecutoria del fallo: \$30.829.936.
- Capital no pagado por mayor valor descontado por aportes para pensión: \$ \$63.362.006.
- Intereses de mora capital no pagado a partir del 1° de mayo de 2019 hasta el 30 de noviembre del mismo año: \$10.214.949.

- **Total mandamiento de pago hasta el 30 de noviembre de 2019: \$109.406.892.**

Respecto de los factores salariales liquidados, indica que, la entidad ejecutada dejó de incluir factores salariales devengados por la pensionada en su ultimo año de servicios y que le fueron pagados unos meses después de su retiro.

Referente a lo anterior, se debe señalar que, en efecto en la Resolución No. RDP007484 del 6 de marzo de 2019, que modifica la Resolución No. RDP 43967 del 14 de noviembre de 2018, excluye de la liquidación el factor salarial denominado prima de vacaciones, afirmando que la misma fue certificada por fuera del periodo a liquidar.

Del mismo modo, el apoderado judicial de la parte activa de la litis, reseña la condena impuesta por este Despacho Judicial en primera instancia, así como la modificación que realizó el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca a través de sentencia de data 10 de noviembre de 2017.

Así las cosas, debe señalar el Despacho, que le asiste razón al apoderado de la parte ejecutante, habida consideración que, el escrito elevado ante este Estrado Judicial cumple con los requisitos exigidos por el H. Consejo de Estado señalados anteriormente, es decir, incumplimiento parcial de la entidad ejecutada, condena impuesta y el monto de la obligación preciso, así como, la obligación de la entidad a pagar unas sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.

En virtud de lo anterior, se **REPONDRÁ** el auto calendado 7 de julio de 2020, y en su lugar se procederá a librar mandamiento de pago.

CONSIDERACIONES

Como primera medida, el artículo 104 de la ley 1437 de 2011, indica en el numeral 6to ibídem, que esta Jurisdicción conocerá, entre otros, de *“Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades.”*.

En este sentido, el artículo 297 del C.P.A.C.A., prevé:

***“Artículo 297. Título ejecutivo.** Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:*

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias. (...)”

Ahora bien, teniendo en cuenta que, en la Jurisdicción Contencioso Administrativo, tiene plena vigencia todo el articulado de la Ley 1564 de 2012, por la cual se expidió el Código General del Proceso³, se tiene que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los aspectos no regulados en el mismo se seguirán las reglas del Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso).

Conforme con lo anterior, se observa que el artículo 422 del Código General del Proceso, en relación con las calidades particulares del título ejecutivo, determinó frente a providencias judiciales, lo siguiente:

***“Artículo 422. Título ejecutivo.** Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo [184](#).”*

Así las cosas, de conformidad con los artículos reseñados, el proceso ejecutivo tendría varios derroteros a tener en cuenta en casos como el presente:

1. Solicitud: A través de memorial radicado por el abogado **GILBERTO DUQUE OSPINA** en representación de la señora **ANA ISABEL CAMARGO ÁNGEL**, solicitó al Juzgado que se libre mandamiento ejecutivo en contra de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN EPNSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -**

³ CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C. Consejero Ponente: ENRIQUE GIL BOTERO. Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014). Radicación número: 05001233100020110046201 (44.544). Demandante: Jerlis Antonio Mercado Castillo y otros. Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Ejército Nacional. Referencia: Acción de Reparación Directa.

UGPP, con el fin de obtener la inclusión de todos los factores salariales devengados por la parte ejecutante en su ultimo año de servicio, tal y como fue ordenado en los fallos de primera y segunda instancia. Así como la devolución del capital no pagado por mayor valor descontado por aportes para pensión.

Luego entonces, se encuentra satisfecho el requisito de solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo.

Ahora bien, adicional a la solicitud, se hace preciso analizar si la misma fue elevada dentro del término que la Ley que otorga para ello.

Al respecto, el inciso K del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma vigente al momento de la expedición de la sentencia, frente a la oportunidad de presentación de la acción ejecutiva determinó:

“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

(...)

k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida. (...)

Negrilla y subraya fuera de texto original

A su vez el artículo 192 del mismo ordenamiento dispuso en su inciso segundo establece:

“Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas.

(...)

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada. (...)

Negrilla y subraya fuera de texto original

Así las cosas, en principio la ejecutante contaba con un término de cinco años a partir de la exigibilidad del derecho, para la presentación de la demanda ejecutiva, es decir dicho término inicia luego de vencidos los 10 meses que tiene la entidad para realizar el pago.

En el plenario se constata que el ejecutado es la **Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP**.

Del mismo modo, en el plenario se evidencia que la demanda fue radicada ante la Oficina de Apoyo Judicial para los Juzgados Administrativos el 11 de diciembre de 2019 (fl.2° expediente digital), circunstancia por la cual en los términos expuestos por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la presente demanda se encuentra presentada dentro del término legal, teniendo en cuenta que la ejecutoria de la sentencia fue del **10 de septiembre de 2018**.

Por lo anterior, es claro que la demanda ejecutiva fue presentada dentro del término de Ley.

De la misma manera, se puede constatar, que la parte actora radicó solicitud de cumplimiento a un fallo judicial el **30 de enero de 2019**, tal y como se observa a folios 22 a 24 del expediente digital.

2. Título Ejecutivo: En el presente asunto, el título ejecutivo lo constituyen varias actuaciones a saber:

Por un lado, se encuentra las sentencias proferidas por este Juzgado el 9 de marzo de 2015 y 10 de noviembre de 2017, por el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca. (Expediente de Nulidad y Restablecimiento del Derecho).

Seguidamente, debe tenerse como tal las Resoluciones 043967 del 14 de noviembre de 2018, por medio de la cual se reliquida una pensión de vejez en cumplimiento a un fallo judicial y RDP007484 del 6 de marzo de 2019, que modifica la primera resolución. (fls. 26 a 37 del expediente digital)

Conforme con lo anterior, el Despacho considera que las sentencias proferidas, conjuntamente con los actos de ejecución y la liquidación que efectuó la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, para el cumplimiento de la sentencia, configuran un título ejecutivo, por darse cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 422 del Código General del Proceso, en razón a que la decisión se encuentra debidamente ejecutoriada y del contenido de la misma se desprende la obligación hoy reclamada por la ejecutante, que corresponde a la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios, siendo una de las órdenes impartidas por este estrado judicial y el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y que fue cumplida de manera parcial por el ente administrativo ejecutado, junto con la devolución del capital no pagado por concepto del mayor valor descontado por concepto aportes no efectuados para pensión, y los intereses corrientes y moratorios a partir del **30 de noviembre de 2019**.

Así las cosas, es procedente el mandamiento de pago sujeto a las prescripciones contenidas en los artículos 424 y 430 del Código General del Proceso, respecto de la **inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados en el último año laborado**, y ordenados en las sentencias aportadas como título ejecutivo, junto con el pago de intereses moratorios que devengaron.

Ahora bien, se tiene que el monto solicitado por la ejecutante asciende a la suma de **\$109.406892⁴**, conforme la liquidación expuesta por el ejecutante, **sin que necesariamente esta suma sea el valor por cancelar**, toda vez que ello está sujeto a la determinación precisa de la solicitud de cumplimiento a la sentencia, las excepciones propuestas por la demandada y a la liquidación del crédito.

A su vez, se precisa que los valores ordenados se encuentran comprendidos en el último año de prestación de servicios, en virtud de lo dispuesto en las sentencias proferidas el **9 de marzo de 2015 y 10 de noviembre de 2017**, por este Despacho Judicial y el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca correspondientemente, bajo los parámetros que en las mismas se establecieron.

⁴ Folio 4 expediente digital

Cabe resaltar, que la causación de intereses moratorios desde la ejecutoria de la sentencia, esto es, desde el **10 de septiembre de 2018**, hasta la solicitud de cumplimiento al fallo, **30 de enero de 2019**, cesó de conformidad con lo dispuesto en el art. 192 del CPACA, pues la accionante dejó pasar un poco más de **un mes** para solicitar el cumplimiento del fallo. Razón por la cual el despacho librará mandamiento ejecutivo por los intereses moratorios insolutos causados a partir del día siguiente hábil a la solicitud del cumplimiento del fallo, esto es, **31 de enero de 2019**.

En mérito de lo expuesto, en los términos del artículo 430 del Código General del Proceso, el Despacho dispondrá librar mandamiento ejecutivo a favor de la señora **ANA ISABEL CAMARGO ÁNGEL** en contra de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP** por la suma de **ciento nueve millones cuatrocientos seis mil ochocientos noventa y dos pesos (\$109.406.892) m/cte.**

En virtud de lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: REPONER la providencia de data 7 de julio de 2020, de conformidad con las razones expuestas a lo largo de este proveído.

SEGUNDO: Librar mandamiento de pago por la vía ejecutiva, a favor de la señora **ANA ISABEL CAMARGO ÁNGEL** en contra de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP** por la suma de **CIENTO NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$109.406.892) m/cte.,** resultante de la no inclusión de la totalidad de los factores salariales en la liquidación de la mesada pensional junto con el capital no pagado por el mayor valor descontado por aportes para pensión, e interés moratorios.

TERCERO: Para los efectos del numeral 4° del artículo 171 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 2° del decreto 2867 de 1989, se fija la suma de **SESENTA MIL PESOS (\$60.000,00.) m/cte,** que deberá consignar la parte demandante en el término de 10 días contados a partir de la notificación de la presente

providencia, en la **CUENTA CORRIENTE ÚNICA NACIONAL No. 3-082-00-00636-6 del Banco Agrario “CSJ-DERECHOS, ARANCELES, EMOLUMENTOS Y COSTOS –CUN”**.

CUARTO: Notifíquese esta providencia personalmente a la entidad demandada, **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.

QUINTO: Fíjese a la entidad demandada, el término de cinco (5) días para que cumpla con la obligación de efectuar el pago de los intereses moratorios, reconocidos en la sentencia que constituyen título ejecutivo en el presente proceso (Artículo 431 C.G.P.).

SEXTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, la demandada podrá proponer excepciones de mérito, siguiendo las reglas contenidas en el artículo 442 del C.G.P.

SÉPTIMO: Notifíquese personalmente al señor representante del Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.

OCTAVO: Notifíquese personalmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, en los términos del artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.

En el evento en que la agencia decida intervenir en el proceso, el mismo se suspenderá en los términos del artículo 611 del Código General del Proceso.

NOVENO: Se reconoce personería jurídica al abogado **GILBERTO DUQUE OSPINA**, identificado con cédula de ciudadanía número 2.875.933 de Bogotá y portador de la tarjeta profesional 6.270 del C. S. de la J., como apoderado principal de la demandante, en los términos y para los fines del poder otorgado en el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho expediente No. **1100133331026-2012-00191-00**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Por:

**ANDRES JOSE
GNECCO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 026
DEL CIRCUITO**



**JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.**

Por anotación en **ESTADO ORDINARIO** notifico a las partes
la providencia anterior hoy **17 DE FEBRERO DE 2021**, a
las ocho de la mañana (8:00 a.m.)

**LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA
SECRETARIA**

QUINTERO

**ADMINISTRATIVO
BOGOTA-**

CUNDINAMARCA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme
a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

f4120a1a7d56ddcb1af283cc27c8374c17f782b5447c8018e216099ee54c9fa8

Documento generado en 16/02/2021 04:15:53 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>